

# Caso megatoma en San Antonio: comunidades acusan estafa y se querellan contra el ministro Montes



**U**na querella por estafa fue presentada ante el **Juzgado de Garantía de San Antonio** por el **Movimiento de Pobladores Organizados**, apuntando directamente a altas autoridades del Gobierno en el **contexto del desalojo de la megatoma del Cerro Centinela**. La acción judicial va dirigida contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, **Carlos Montes**; la delegada del Minvu en San Antonio, **Gloria Maira**; y el delegado presidencial regional de Valparaíso, **Yanino Riquelme**, a quienes se acusa de haber impulsado un proceso habitacional **“unilateral e injustificado”**, que habría vulnerado los acuerdos sostenidos con las comunidades.

**Pobladores del Cerro Centinela ingresaron una querella contra autoridades de Gobierno, denunciando presiones, irregularidades y un proyecto habitacional que no cumpliría los acuerdos comprometidos.**

De acuerdo con la querella, durante extensas negociaciones el **Estado habría comprometido un proyecto habitacional** que considerara la **totalidad de los terrenos ocupados por la megatoma**. Sin embargo, el plan presentado por el Ejecutivo en diciembre y ejecutado desde el 12 de enero **contempla solo 100 hectáreas**, lo que, a juicio de los pobladores, constituye un incumplimiento grave y engañoso. El vocero del movimiento, Gustavo Sepúlveda, afirmó que el proceso estuvo marcado por irregularida-

des desde sus inicios. **“Todo este procedimiento, desde el protocolo de acuerdo hasta la expropiación realizada en diciembre de 2025, fue fraudulento e ilegítimo. Las dirigentas estaban amenazadas”**, sostuvo. El escrito judicial sostiene que el acto expropiatorio del 3 de diciembre de 2025 **carecería de fundamentos reales de interés público, nacional o social**, y que el proceso habría estado viciado por presiones a dirigentes sociales y por la participación irregular de

cooperativas. En la querella, el **Movimiento de Pobladores Organizados** solicitó que el Ministerio Público **investigue los hechos, cite a declarar a las autoridades involucradas** y oficie antecedentes sobre la **legalidad de las cooperativas** y del **proceso de expropiación**. Asimismo, se pidió una **medida cautelar para suspender los desalojos**, argumentando que la sentencia judicial se estaría ejecutando de manera parcial y fuera del marco legal. La resolución de estas acciones quedó en manos del Juzgado de Garantía de San Antonio, mientras el proceso continúa desarrollándose en el sector Los Pinos-Don José.